

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-1342-2023
CARATULADO : PÉREZ/FISCO DE CHILE (C.D.E)
Santiago, veintinueve de Junio de dos mil veintitrés
VISTOS

A folio 1, con fecha 25 de enero de 2023, comparece don **Luis Pérez Camousseight**, cédula de identidad N°12.720.413-6, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N°326, oficina N°707, comuna de Santiago, en representación de don **Domingo Enrique Pérez Droguett**, cédula de identidad N°6.387.080-3, jubilado, domiciliado en Las Vizcachas N°3873, comuna de Maipú, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en contra de **Fisco de Chile**, RUT 61.006.000-5, representado para estos efectos por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1225, 4to Piso, comuna de Santiago, en conformidad a los antecedentes de hecho y derecho que expone;

A folio 8, consta que con fecha 8 de febrero de 2023, se notificó la demanda al demandado debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado en conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil;

A folio 9 y 10, con fecha 27 de febrero de 2023, comparece doña **Ruth Israel López**, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del **Consejo de Defensa del Estado**, por el **Fisco de Chile**, quien viene en contestar la demanda interpuesta por el demandante, solicitando su total rechazo, con costas;

A folio 12, por resolución de 2 de marzo de 2023, se tuvo por contestada la demanda por parte de la demandada, confiriéndose traslado para la réplica;

A folio 13, mediante presentación de fecha 6 de marzo de 2023, el demandante evacuó el trámite de réplica;

A folio 14, por resolución de 7 de marzo de 2023, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica, confiriendo traslado para la dúplica;

A folio 15, mediante presentación de fecha 14 de marzo de 2023, la demandada evacuó el trámite de dúplica;

A folio 16, por resolución de 21 de marzo de 2023, se tuvo por evacuada la dúplica, omitiéndose el llamado a conciliación, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1º) Si la demandada incurrió en un actuar culposo, negligente o doloso. Fecha y circunstancias en que tuvieron lugar los incidentes que causaron agravio a la actora. 2º) Perjuicios sufridos por la parte demandante. Naturaleza, monto y hechos que configuran la relación de causalidad. 3º) Efectividad de haberse reparado los daños ocasionados a la parte demandante con ocasión de los mismos hechos. En la afirmativa, forma y montos a los que asciende la reparación.



4º) Efectividad de haber transcurrido el plazo de prescripción extintiva de la acción ejercida en autos, y que fue notificada a ambas partes el 27 de abril de 2023;

A folio 31, con fecha 13 de junio de 2023, encontrándose la causa en estado, se las citó a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 25 de enero de 2023, comparece don Luis Pérez Camousseight, abogado, en representación de don Domingo Enrique Pérez Droguett, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en contra de Fisco de Chile, representado para estos efectos por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, fundándose en los antecedentes de hecho y derecho que se exponen a continuación.

Refiere que el demandante, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech1N°18.734, nacido el 22 de Noviembre de 1953, de actuales 69 años de edad. A la fecha de la ocurrencia de los hechos era menor de edad, empleado de la industria óptica Rodenstock Chile, ubicada en calle Beaucheff Nro. 1581, Santiago Centro, donde participaba en el sindicato y en el comité paritario. Además era militante de las Juventudes Comunistas.

Puntualiza que fue detenido por Carabineros en su lugar de trabajo el día 22 de Septiembre de 1973, siendo trasladado hasta la Octava Comisaría de Carabineros de Santiago, lugar donde queda en calidad de incomunicado. En dicho lugar, don Domingo fue interrogado periódicamente y en cada interrogatorio fue torturado mediante la aplicación de golpes de pies y puños en distintas partes de su cuerpo y culatazos. Luego de unas horas en la Comisaría, el mismo día 22 de Septiembre de 1973, fue trasladado e ingresado al Estadio Nacional, recinto a cargo del Ejército, donde, luego del recibimiento de rigor, lo que incluía golpes en distintas partes de su cuerpo, fue dejado junto a otros detenidos en el sector de camarines. Algunos días después, fue llevado al velódromo del estadio para ser interrogado en varias ocasiones. Refiere que en cada interrogatorio le aplicaron golpes de corriente en los testículos, golpes de puño y algunos cortes con un arma blanca. Indica que todo el tiempo estuvo con la vista vendada y que en los interrogatorios sus captores lo hacían chocar con una muralla para golpearse, las preguntas siempre iban acompañadas de golpes.

Finalmente quedó en libertad el día 7 de octubre de 1973. Sin embargo, fue despedido de su trabajo y deambuló en trabajos diversos, entre otros, el de artesano.

Acusa que producto de las torturas recibidas y su injusta privación de libertad, don Domingo perdió dos piezas dentales, tiene cicatrices en la zona del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJKCXGKPKSC

estómago producto de las heridas con arma blanca recibidas, además de padecer de depresión, delirio de persecución, angustia y ansiedad, lo que revela que sufre de un trastorno de estrés postraumático crónico hasta la presente fecha.

Previas citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizados, acogerla a tramitación y condenándola al pago a la suma de **\$200.000.000.-**, con reajustes e intereses, con expresa condenación en costas;

SEGUNDO: Que, la demandada debidamente emplazada en autos, contestando la demanda y luego duplicando solicitó el rechazo de la acción, fundado en las excepciones, alegaciones y defensas que introdujo al debate en la etapa de discusión, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

En primer lugar, viene en oponer la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada la demandante, defensa que opone, atendida a las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Que en cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, sostiene que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Pensiones: La suma de \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992; c) Bonos: La suma de \$41.910.643.367, asignada por la ley 19.980, más la suma de \$23.388.490.737, por la ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N° 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$23.388.490.737.

En síntesis, a diciembre de 2019, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$992.084.910.400.

En la especie, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N°19.992, y sus respectivas modificaciones, leyes que establecieron una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para



beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Adicionalmente a los montos antes referido, los demandantes recibieron en forma reciente el aporte único de reparación contemplado por la Ley N° 20.874, por la suma de \$1.000.000.-

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La reconstrucción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

En efecto, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.



Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, así como el tenor de los documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, se opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizada la demandante.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo a los relatos del actor, la detención ilegal, prisión política y tortura que sufrió ocurrió desde el 22 de septiembre al 7 de octubre de 1973.

En circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 8 de febrero de 2023, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, solicitando se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los supuestos derechos a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Agrega que en el derecho internacional de los derechos humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En tercer lugar y en cuanto al daño reclamado, y en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, su parte controvierte



expresamente el monto del daño moral demandado, en cuanto a su naturaleza así como a su excesivo monto, haciendo presente que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificándolo, en términos económicos, como el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente de satisfacción.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el Tribunal debe considerar todos los beneficios y pagos extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente que los reajustes e intereses sólo pueden devengarse en el caso que se dicte sentencia que acoja la demanda y establezca esa obligación, sin embargo, mientras aquella no se encuentre firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda de autos, y con su mérito, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido;

TERCERO: Que, en su escrito de réplica la demandante expone pasajes de jurisprudencia actual respecto a las excepciones opuestas, y señala en síntesis que no existe incompatibilidad entre los beneficios recibidos y la indemnización pretendida. Luego, ratifica lo expuesto en su demanda referente a la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida.



Por otro lado, la demandada en su escrito de réplica ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en su contestación, pasando a exponer una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha 16 de marzo de 2016 que apoya sus argumentaciones;

CUARTO: Que, se omitió el llamado a conciliación y el Tribunal al recibir la causa a prueba, fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1º) Si la demandada incurrió en un actuar culposos, negligente o doloso. Fecha y circunstancias en que tuvieron lugar los incidentes que causaron agravio a la actora. 2º) Perjuicios sufridos por la parte demandante. Naturaleza, monto y hechos que configuran la relación de causalidad. 3º) Efectividad de haberse reparado los daños ocasionados a la parte demandante con ocasión de los mismos hechos. En la afirmativa, forma y montos a los que asciende la reparación. 4º) Efectividad de haber transcurrido el plazo de prescripción extintiva de la acción ejercida en autos, y que fue notificada a ambas partes el 27 de abril de 2023;

QUINTO: Que, la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su acción, acompañó los siguientes documentos:

1. A folio 22, Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28º Juzgado Civil de Santiago.
2. A folio 22, Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
3. A folio 22, Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
4. A folio 22, Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.
5. A folio 22, Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.
6. A folio 23, Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1 Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la



que mi representado don Domingo Enrique Pérez Droguett figura con el número 18.734.

7. A folio 23, Copia de antecedentes de carpeta de don Domingo Enrique Pérez Droguett del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
8. A folio 23, Certificado de nacimiento de don Domingo Enrique Pérez Droguett, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
9. A folio 24, Informe psicológico de daño de don Domingo Enrique Pérez Droguett emitido por el Prais del Servicio de Salud Metropolitano Central de fecha 25 de Abril de 2023;

SEXTO: Que, la demandada, rindió la siguiente prueba documental:

1. A folio 17, oficio número 4792-12740 de fecha 4 de abril de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social, que contiene el detalle de beneficios de reparación otorgados en virtud de las leyes 19.992 y 20.874, aguinaldos, y pensión actual, recibidos por don Domingo Enrique Pérez Droguett;

SÉPTIMO: Que, son hechos de la causa, por así encontrar se acreditados en el proceso, los siguientes:

1. Que, don Domingo Enrique Pérez Droguett, se encuentra incluido en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde aparece asignado bajo el N°18.734.
2. Que, consta del oficio proveniente del Instituto de Previsión Social que la demandante ha recibido por concepto de Pensión Ley N°19.992, la suma de \$34.531.995.-; por concepto de Bono Ley 20.874, la suma de \$1.000.000; por concepto de Aguinaldos la suma de \$609.685, sumas que ascienden a un total a la fecha del informe -4 de abril de 2023- al monto de \$36.141.680.-; con una pensión actual de \$230.025.-;

OCTAVO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Domingo Enrique Pérez Droguett, en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, solicitando una indemnización ascendente a \$200.000.000.- por concepto de daño moral o lo que el Tribunal estime pertinente.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de pago, por cuanto el actor ha sido reparado mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJKCXGKPKSC

Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

NOVENO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcido el actor en conformidad a la Ley N° 19.123 y N° 19.980, cabe señalar que al respecto se acompañó por la demandada oficio proveniente del Instituto de Previsión Social que detalla que el demandante ha recibido por concepto de Pensión Ley N°19.992, la suma de \$34.531.995.-; por concepto de Bono Ley 20.874, la suma de \$1.000.000; por concepto de Aguinaldos la suma de \$609.685, sumas que ascienden a un total a la fecha del informe -4 de abril de 2023- al monto de \$36.141.680.-; con una pensión actual de \$230.025.-

No obstante, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia Ley N°19.123 no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de este magistrado- con una reparación meramente simbólica.

Por otro lado, el Tribunal podrá tomar en consideración, al momento de fijar eventuales indemnizaciones por daño moral, las reparaciones materiales y simbólicas proporcionadas al demandante por el Fisco de Chile, en su calidad de víctima de violaciones a sus derechos fundamentales;

DÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes, atendido que no es controvertido que los hechos que afectaron al demandante ocurrieron en el año 1973, esto es, 48 años antes de la interposición de la demanda civil.



Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad, como lo son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que "... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la



imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

Lo dicho no obsta a que el Tribunal, al momento de regular la eventual indemnización de perjuicios, considere el tiempo transcurrido entre el padecimiento del actor y el ejercicio de la acción civil que inició esta causa, en este caso luego de 50 años, ya que el paso del tiempo necesariamente contribuye a disminuir la necesidad de reparación. No es posible equiparar la situación del demandante de esta causa con la de una persona que haya sufrido torturas o detenciones en años recientes y que aún sufre la plenitud de consecuencias perniciosas tanto físicas como psicológicas derivadas de esos ilícitos;

UNDÉCIMO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de la actora, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como ya se adelantó, en el motivo séptimo precedente, es un hecho de la causa que el demandante, se encuentra en la nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde la demandante aparece asignada bajo el N°18.734, reconociéndose así su calidad de “Preso político y torturado”, y que conforme a lo expuesto en su libelo, fue detenido por Agentes del Estado el 22 de Septiembre de 1973, permaneciendo en aquella calidad hasta 7 de octubre del mismo año. Asimismo, la detención y tortura del demandante, no ha sido negada en ningún momento por el demandado, por lo que no es un hecho controvertido.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Domingo Enrique Pérez Droguett.



En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DUODÉCIMO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor, y que hace consistir en daño moral.

Que, en cuanto al daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en



un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto al daño moral, en orden a acreditar su existencia y evaluación, el demandante rindió solo prueba documental consistente en un informe psicológico de daño acompañado a folio 24, en el cual se advierte que “...el Sr. Pérez vive en un trastorno de estrés post traumático de características patológicas. Trastorno complejo generado por sus detenciones y sometimiento a torturas; no hay ritual de reparación moral ni social que desarrolle consuelo y asimilación de la pérdida de la dignidad propia y en circunstancia extremas como la vivida en un menor de edad. Condición compleja que genera sufrimiento psicológico percibido en el funcionamiento del Sr. Pérez Droguett.”, y como se desprende de los hechos acreditados, se encuentra reconocida su calidad de víctima de prisión política y tortura, por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech);

DÉCIMO CUARTO: Que, si bien la privación de libertad y tortura, en el contexto que se ha reseñado resulta difícil de calcular y cuantificar, se hace necesario a fin de analizar la severidad del sufrimiento padecido, tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo presente para ello las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los apremios físicos y mentales que éstos pueden causar, el tiempo transcurrido, las reparaciones materiales y morales proporcionadas por el Estado de Chile al demandante, incluyendo una pensión vitalicia que continuará siendo pagada con posterioridad al presente juicio.

El Tribunal tiene en especial consideración para tal determinación que la detención ilegal y aplicación de golpes y vejaciones se extendió desde el 22 de septiembre de 1973 hasta 7 de octubre del mismo año, es decir, por 15 días; el hecho de ser menor de edad al momento de los hechos, aún cuando no se acreditó el día de su fecha de nacimiento; el transcurso de 50 años entre la ocurrencia de los hechos y



la interposición de la demanda; y la entrega de \$36.141.680.- y una pensión que actualmente asciende a \$230.025.-por parte del Fisco de Chile al demandante, justamente en razón de la violación a los derechos humanos que padeció este último. Por lo que se regulará prudencialmente en la cantidad total de veintidos millones de pesos (\$22.000.000.-).

DÉCIMO QUINTO: Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago, y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada;

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando este magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, en cumplimiento de la obligación legal de defensa del interés fiscal, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, **se resuelve:**

a) Que **se rechazan** las excepciones de pago y prescripción deducidas por la demandada;

b) Que **se acoge, parcialmente**, la demanda de lo principal de 25 de enero de 2023 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de **veintidos millones de pesos (\$22.000.000.-)** al demandante don Domingo Enrique Pérez Droguett, cédula de identidad N°6.387.080-3; más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo quinto precedente, desestimándose en lo demás;

c) Que, se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese en su oportunidad.

Consúltense si no se apelaré.

Rol N° C-1342-2023.-

Pronunciada por **Daniel Valenzuela Castillo**, Juez Suplente del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Junio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XJKCXGKPKSC

